



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 064

Medellín, diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto Legislativo No. 806 del 04 de junio de 2020, procede a proferir el fallo dentro de este proceso ordinario promovido por **DELMIRO MONTOYA RUIZ** contra **DIEGO Y LUIS MAURICIO GUIO PUERTO y LOGITRANS S.A.**

A continuación, la Sala, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 028 de discusión de proyectos, adoptó el presentado por el ponente que se consigna enseguida:

El demandante, a través de apoderado, presentó acción ordinaria contra las indicadas personas, buscando se declare que entre los señores DIEGO Y LUIS MAURICIO GUIO PUERTO y él existió un contrato de trabajo verbal desde el 11 de octubre de 2007, el cual terminó sin justa causa por los demandados, debiéndose señalar como fecha de terminación, la de la desvinculación del señor Montoya Ruiz del sistema de seguridad social en pensiones. Que la sociedad Logística de transportes S.A. LOGITRANS S.A., es individual y solidariamente responsable de la totalidad de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo, como contratante del servicio de transporte prestado por el señor Delmiro Montoya; que las personas naturales y la jurídica reseñadas son responsables, individual y/o solidariamente responsables de la totalidad de las obligaciones emanadas de la relación de trabajo que sostuvieron con el señor Montoya Ruiz, como por el pago de las incapacidades médicas generadas por la EPS Saludcoop

con ocasión de la cirugía de amputación de la pierna izquierda el 23 de julio de 2012, las que no fueron pagadas por el empleador. Que se condene a los demandados al pago de las cesantías durante todo el tiempo del contrato, intereses de cesantías, duplicados por extemporaneidad, vacaciones, prima de servicios, indemnización por despido, indemnización por 6 meses de salario del art. 26 de la ley 361 de 1997, sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales, indemnización por el no depósito de cesantías en un fondo y las costas.

Como hechos relata los siguientes: Se desempeñó como conductor de los vehículos de propiedad del señor DIEGO GUIO PUERTO, administrados por LUIS MAURICIO GUIO PUERTO; devengaba un básico de \$500.000 más el 10% del valor del flete que pagaba el contratante al propietario del vehículo. En los últimos tres meses devengó \$4.000.000, no conservando las planillas de pago. El 12 de julio de 2012 presentó una serie de molestias mientras manejaba la mula de placas SRL678, siendo necesario su relevo. Ingresó a la Clínica Saludcoop en Ibagué, presentando una afección por diabetes, siendo necesaria la amputación de su miembro inferior izquierdo a nivel diafisario de fémur, siendo atendido sin interrupción hasta la última incapacidad del 26 de noviembre de 2012. Desde su ingreso a la clínica los empleadores suspendieron todo contacto, ni le cancelaron las incapacidades, haciendo caso omiso de las solicitudes del actor, también a través de correo electrónico del 20 de noviembre de 2012. El 4 de marzo de 2013 Colpensiones le reconoció pensión de vejez. Desconoce cuándo terminó el contrato, pues no recibió ninguna comunicación. En la resolución de Colpensiones le señala que las cotizaciones por el riesgo de vejez terminaron el 31 de marzo de 2012, sin embargo, la EPS Saludcoop continuó expidiendo incapacidades hasta noviembre de 2012. Hasta la presentación del libelo los demandados no le han cancelado salarios desde que ingresó a la clínica, 12 de julio de 2013, las incapacidades, las cesantías y demás derechos que reclama. Cualquiera que fuera la fecha del despido, este se produjo cuando se encontraba incapacitado o en situación de discapacidad y no se adelantó ningún trámite ante el Ministerio de Protección Social para su desvinculación. Desde el inicio hasta el final del contrato siempre se le destinó en la prestación de servicios de transporte de carga para logística de transporte S.A.

Los demandados no atendieron a los diferentes llamados que se les hizo a través de las notificaciones por aviso, y el emplazamiento, debiéndose designarles curador ad litem, quien dio respuesta el 16 de febrero de 2016, señalando que no le consta ninguno de los hechos, dada su condición de desconocimiento de la realidad, que estará pendiente de lo que resultare probado. Como excepción planteó la de prescripción (fls. 126 expediente físico).

La apoderada de **LOGITRANS S.A.** señaló en la respuesta, que la empresa no tuvo contrato ni relación laboral con el demandante. Se opuso a las pretensiones y como excepciones planteó las de prescripción, inexistencia de la obligación, pago y buena fe.

El **JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2020, declaró la relación laboral entre el señor MONTOYA RUIZ Y LOS HERMANOS DIEGO LEANDRO Y LUIS MAURICIO GUIO PUERTO, entre el 11 de octubre de 2007 y el 31 de marzo de 2012, con un último salario de \$3.258.388 mensuales. Declaró que la empresa LOGÍSTICA DE TRANSPORTE S.A. "LOGITRANS" es solidariamente responsable de las obligaciones derivadas de la mencionada vinculación. CONDENÓ a las demandadas solidariamente al pago del auxilio de cesantía, intereses de cesantía con su indemnización por no pago oportuno, primas de servicio, vacaciones compensadas en dinero, sanción por no consignación de cesantías, indemnización moratoria por 24 meses de salario desde 1º de abril de 2012 a 1º de abril de 2014, más los intereses a la tasa máxima de crédito de libre inversión certificada por la Super bancaria desde el inicio del mes 25 hasta el pago de las acreencias prestacionales. ABSOLVIÓ a las demandadas de las demás pretensiones. Declaró probada parcialmente la excepción de pago, no así las demás.

IMPUGNACIÓN

Todas las partes impugnaron la decisión, en los siguientes términos: La apoderada de la parte demandante señaló que no comparte los extremos de la relación fijados por el juez, pues en julio de 2012 el señor Montoya estaba manejando una de las mulas de los señores Guio Puerto. Tampoco está de acuerdo con el básico desestimado por el despacho ya que el

mismo fue corroborado por el demandante y uno de los testigos presentados al proceso, incluso el otro testigo también habló de un básico, nunca trabajaron solo a porcentaje y sobre ese básico se liquidaban las prestaciones; como consecuencia de la extensión del extremo final de la relación, se debe acceder a las indemnizaciones por despido injusto.

La apoderada de Logitrans se manifestó así: No existe evidencia de las fechas de iniciación y terminación de la relación, por tanto, no puede llegarse a la conclusión a la que arribó el despacho. Los testigos presentados por el demandante, a ninguno le consta de manera personal la fecha de ingreso y terminación del contrato. El segundo punto de inconformidad está referido al salario determinado en la sentencia y llama la atención que si bien los testigos manifiestan que el demandante recibía un porcentaje del flete pagado por la transportadora a ninguno de ellos le consta personal, ni directamente que este hubiera sido estipulado con el demandante, ni mucho menos que estos valores le fueran cancelados, no obra en el plenario constancia de pago de dichos fletes al demandante y si se observa la historia laboral que se adjunta como prueba, tampoco coincide con los valores que se fijaron acá como salarios promedios devengados. Al no existir certeza sobre el valor real y efectivamente recibido por el demandante por el supuesto flete, no puede arribarse a esta conclusión, ni aun en el evento en que la sociedad transportadora que representa, al dar cumplimiento a la orden judicial remitiera constancia de los fletes pagados a los codemandados por transporte. Frente a la liquidación de cesantías, tercer punto de discordia, por no aplicar la prescripción, esta prestación no es ajena a esa excepción extintiva, como de antaño lo enseñó la Corte Suprema de Justicia, debiéndose partir de la fecha de exigibilidad de su pago y no de otra fecha. Como lo indicó el fallador, el régimen aplicable es el de la ley 50 de 1990, que establece un sistema de liquidación anual y definitivo constituyendo un pago liberatorio, estableciendo además una fecha máxima de pago, hasta el 14 de febrero de la anualidad siguiente a la causación, de manera que desde esa fecha debe contabilizarse la prescripción y si el empleador no paga es deudor moroso y no es lógico principiar la exigibilidad en otra fecha. Los arts. 98 y 99 de la ley 50 establecieron un sistema de liquidación anual, por lo cual el derecho se causa y consolida el 31 de diciembre de cada año, debiendo ser consignado a más tardar el 15 de febrero del año siguiente, de tal suerte

que la obligación surge a la vida el 31 de diciembre de cada año durante la vigencia de la relación, no siendo razonable que el término de exigibilidad empiece a la terminación del contrato. Frente a las sanciones moratorias debe tenerse en cuenta, como lo dijo el fallador de instancia, que estas no se aplican de manera automática, sino que dependen de la buena o mala fe con que actúa la parte, y en este caso no está configurada una mala fe por el solo hecho de que la demandados empleadores del demandante no hubieran comparecido al proceso, porque no está establecido que se negaran a comparecer, sino que no pudieron ser hallados y notificados en debida forma; no existe evidencia de que el derecho de petición contentiva de la reclamación efectuada a estos empleadores fuera efectiva y realmente recibida, de manera que ésta sola omisión no puede configurarse en mala fe para ellos; la condición de mala fe tiene que ser demostrada en el proceso; por su parte la sociedad que representa no recibió reclamación del demandante durante el tiempo que duró su contrato, además de que su actuar ha sido de buena fe.

El curador de los demandados hermanos Guio Puerto señala que ante la compleja problemática que se narra en el libelo, dadas las características de la relación, la parte demandante tenía una carga probatoria dispendiosa, la cual no cumplió en forma satisfactoria. El despacho hace un análisis frente al contrato de trabajo y en su entender le da plena vigencia a la prueba documental aportada y es el hecho de que uno de sus asistidos hubiese afiliado al demandante a la seguridad social. Se le pudiera dar plena vigencia a esa afiliación para aseverar que existió una relación laboral, sin embargo, para el hallazgo de la verdad queda un aliento de duda y es el hecho demostrado de que los vehículos que en hipótesis conducía el demandante eran propiedad de personas distintas a ellos. Frente a los extremos de la relación, en lo narrado en la litis, no se vislumbra con claridad cuales fueron, y dándose validez a la afiliación al sistema de seguridad social se puede decir que la fecha de afiliación es la de inicio de la relación, pero no se pudo establecer con claridad el extremo final, porque no existió la prueba de ello, no hay carta de despido, los testimonios vertidos no ofrecen ninguna claridad acerca de este tema, por ende para el recurrente es motivo de disenso este extremo final por la duda. Frente a la existencia de la relación laboral, no puede desconocerse que es algo extraño el hecho de que algunos vehículos de esa magnitud y valor figuren

a nombre de otras personas a las que se les tiene como hipotéticos propietarios. En cuanto al salario devengado también presenta disenso, piensa que el A quo actuó con facilismo para establecerlo; no existe ningún respaldo probatorio en materia documental, no existen planillas de pago, ni siquiera un recibo de consignación, tampoco la documental es idónea para establecerlo; los testigos no dicen que presenciaron o les fue mostrada una planilla o un solo comprobante de pago, ante la carga dispendiosa que tenía el demandante le pide al Tribunal que considere sus argumentos para que los extremos de la relación sean evaluados, porque no existe prueba categórica de la fecha de terminación, también el monto del salario, porque no existe prueba inequívoca del mismo, habiendo actuado el fallador con extremo facilismo, no pudiendo superar el salario mínimo vigente para cada período.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada del demandante, presente alegaciones, refiriéndose frente a varios aspectos: El primero, los extremos laborales que fueron considerados en el fallo y que sirvieron de base para las liquidaciones, resaltando que las pruebas con las que se cuenta son: la afiliación a la seguridad social a cargo de los demandados; la historia clínica que indica el ingreso al servicio médico del demandante en el mes de julio del año 2012; las declaraciones de los dos testigos quienes informan que tuvieron que ir a reemplazar al demandante y recoger la mula que estaba conduciendo en el momento de caer enfermo. Estos tres elementos permiten establecer no solo el inicio de la relación laboral (la afiliación) sino también el hecho de que, la prestación del servicio continuaba meses después de que fuera desvinculado por parte de sus empleadores del sistema de pensiones. Y este es otro detalle muy importante a tener en cuenta ya que si se hubiera presentado un retiro del servicio, la desafiliación del sistema de seguridad social habría sido en todos los ramos y no solo en pensiones; lo cual tampoco tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que el demandante cumplía su edad de retiro en el mes de junio del año 2012 (fue retirado en pensiones en el mes de marzo de 2012) y que los empleadores lo retiran del sistema de salud meses después de habersele reconocido la pensión de vejez. La demanda aportó como prueba dos derechos de petición remitidos por el demandante a sus empleadores durante el tiempo en que estuvo

incapacitado, mediante los cuales solicitó el reconocimiento de esas incapacidades y de su asignación mensual; ninguna de esas solicitudes tuvo respuesta. Sin embargo y dado que el sistema siguió reconociéndole las incapacidades al demandante durante su tratamiento, es evidente que los empleadores seguían cobrándolas. Todo lo anterior es prueba además del irregular comportamiento de los demandados Guio Puerto frente al trabajador; ese desdén que también fue ratificado por los testigos cuando manifestaron el desconcierto entre los demás conductores por la actitud de la empresa frente a la enfermedad del señor Montoya; y ratifica la mala fe con la que actuaron los demandados desde el momento en el que el trabajador ya no pudo prestarles sus servicios. Por un error involuntario, una de las pretensiones de esta demanda solicitó considerar los extremos de la relación laboral entre el momento en que fue afiliado el demandante a la seguridad social y el momento de su desvinculación en pensiones. Sin embargo, cree que existe abundante prueba adicional que conduce a concluir que considerar la terminación del contrato en el momento de la desvinculación a pensiones no se compadece con la realidad de la continuidad de la prestación del servicio hasta el momento de la incapacidad física del trabajador, así como tampoco se corresponde con el derecho que le asiste a que le sean reconocidos conceptos de su liquidación prestacional, que incluyen la indemnización por haber sido indirectamente despedido de su trabajo mientras se encontraba incapacitado por enfermedad.

El segundo aspecto tiene que ver con el salario que se tuvo en cuenta el fallo para liquidar todos los conceptos a los que fueron condenados los demandados. Los testimonios aportados durante la audiencia de pruebas no tuvieron contradicciones en este punto; ambos exempleados cuentan la forma en la cual era tradicional remunerar a los conductores que prestaban sus servicios a Logitrans, esto es, un básico de \$500.000 al cual se sumaba mensualmente el 10% de los fletes que la empresa Logitrans pagaba a los propietarios y/o administradores de los vehículos que utilizaba para carga. Contrario a lo que manifestó por el señor Juez, no encuentran ninguna contradicción ni inconsistencia en el dicho de ambos testigos sobre el valor y la forma de remuneración. Por todo ello y ante el silencio guardado por los demandados —que se traduce en la práctica en una confesión ficta— el cual se complementó con documentos emanados precisamente de la

empresa Logitrans, debe tenerse como plenamente probado el ingreso percibido por el demandante por lo cual cree que es viable corregir el fallo de primera instancia para incluir como concepto remunerativo el básico de \$500.000 más el 10% de los fletes liquidados mensualmente de los viajes realizados por el trabajador.

El tercer punto tiene que ver con la indemnización por el despido sin justa causa. El fallo es extenso en el análisis de cuándo y por qué procede el pago de la sanción cuando se presenta el despido de un trabajador que está en esa circunstancia de incapacidad. No mucho en cuanto a por qué se escogió declarar que dicha incapacidad se había presentado con posterioridad a la terminación de la relación laboral. Y esto es contradictorio en sí mismo. La demanda detalla y relata claramente cómo mientras el demandante conducía el vehículo tipo mula sintió la molestia en su pierna que fue de tal entidad que le impidió seguir con la conducción. Se demostró que fue llamado otro de sus compañeros conductores (Duvan Galeano, testigo dentro del proceso) para que le recibiera la mula por cuanto él ya no estaba en posibilidad de completar el viaje. Se demostró que el demandante fue internado en la clínica para inicialmente sufrir la amputación de un dedo del pie, pero rápidamente hubo que pasar a la amputación total de su pierna. Si, como efectivamente sucedió, al momento de su enfermedad el demandante estaba conduciendo la mula, desempeñando el trabajo para el que había sido contratado y que llevaba cinco o más años realizando, no es posible concluir que la terminación del contrato se dio a partir de la desvinculación del sistema de pensiones. Pero la inconsistencia en la respuesta por parte de sus empleadores sí es un fuerte indicativo del descuido y desdén con el cual se trató todo lo relacionado con su vinculación laboral y la irresponsabilidad en el pago de las acreencias laborales que aún se le deben al trabajador.

Solicita se acceda a reformar el fallo en cuanto a los extremos de la relación laboral, el verdadero valor de los ingresos percibidos por el trabajador y el injustificado despido del que fue objeto mientras se encontraba incapacitado.

CONSIDERACIONES

De acuerdo a las impugnaciones anteriores se presentan arduas discusiones en este proceso sobre los siguiente puntos: La existencia en de la relación entre las partes, pues el curador ad litem de estos la cuestiona por no aparecer como propietarios de los vehículos; extremo final de la relación, salario devengado por el actor, la imposición de las sanciones moratorias por no pago de prestaciones sociales y no depósito en un fondo de cesantías de las causadas durante la relación, forma de terminación de la relación, prescripción de las cesantías. Estos aspectos tienen que ser mirados detenidamente por la Sala, teniéndose en cuenta la diversa prueba aportada, como la testimonial, el interrogatorio de parte del demandante, y sobre todo la documental que en definitiva brinda las mayores luces de lo acontecido.

Nuestro primer Acercamiento a los temas objeto de debate lo haremos con la testimonial que nos muestra lo siguiente:

Declaró el señor DUVAN GALEANO, quien señaló que conoce al demandante, como a Diego y Luis Mauricio Guio, y a la empresa Logitrans, al primero como conductor de tracto mula, porque trabajó con él y con los hermanos Guio por espacio de 22 meses. Al demandante lo conoce desde 2011 y trabajó hasta el 2012, cuando se enfermó de un pie; se encontraba el declarante en licencia y fue llamado por el patrón Mauricio Guio para que fuera a recibirle la tracto mula, no podía Delmiro manejar, le tocó bajar hasta Planeta Rica, no recuerda la fecha, fue en 2012. Delmiro trabajaba para Diego Guio y Logitrans, devengaba un salario de \$500.000 y el 10% sobre las comisiones, ese porcentaje era sobre el producido neto del carro, o sea lo que valía el flete. En ese tiempo se hacían tres viajes dobles a Tolú Viejo, semanales, los ponían a trabajar muy duro el señor Mauricio Guio. La relación terminó por la enfermedad de Delmiro, él se fue para su ciudad Ibagué y no pudo volver a trabajar. Le movían el cemento a Logitrans, trabajaban con Mauricio Guio. El porcentaje se les pagaba en cada viaje a Tolú, les daban \$355.000 por viaje. A ellos los orientaba el señor Mauricio Guio por orden de Logitrans, empresa que fijaba los turnos de viaje, Delmiro manejó un Chevrolet brigadier de placa terminada en 201 y después un Eagle número 678 de Guio Puerto, eso comentaba Mauricio, jefe inmediato,

nunca vio los papeles de esos carros. No sabe en qué fecha empezó Delmiro; cuando el deponente ingresó ya Delmiro estaba allá con el señor Guio. Al recibir la tractomula transportó al demandante hasta Yarumal y este siguió para Ibagué, le comentó que no podía trabajar más porque estaba enfermo entonces don Mauricio lo despidió. Diego Guio le consignaba en su cuenta el básico mensual y el porcentaje por fletes se los pagaba Mauricio Guio, con el anticipo para peajes en la misma bomba donde tanqueaban. No recuerda hasta que fecha trabajó Delmiro en el 2012. Al deponente lo contrató el señor Mauricio Guio.

DANIEL VELÁSQUEZ CÁRDENAS conoció personalmente al demandante y al demandado Mauricio Guio, a Diego Guio no lo distingue. Fue compañero de Delmiro durante su labor como transportador de cementos argos, conoció a Delmiro desde que trabajaba con Guio en el 2008, le presentaron ellos a Mauricio y trabajó para Guio en 2012, ya que en mayo de 2011 se retiró de la anterior empresa. Delmiro trabajó para los Guio, directamente con Mauricio, quien era el administrador de los carros de la familia, esos carros tenían un logo en el vidrio que decía Criadero San Fernando y todos sabían que esos carros eran de la familia Guio, administrados por Mauricio. Desde que conoció a Delmiro trabajaba para Mauricio, en principio en unos carros viejos que se fueron remodelando como un Eagle, Delmiro trabajó hasta el 2012 que se enfermó de un pie, le tuvieron que amputar la pierna, no recuerda la fecha exacta. No sabe el salario de Delmiro, era un básico más los promedios de viajes, el 10% que les daban por viaje, no conoció el básico de Delmiro, a él le daban \$500.000. Manifiesta que no llegó a ver algún pago de las comisiones a Delmiro.

Esta testimonial nos muestra un trabajo continuo del actor como conductor de los vehículos de la familia Guio, administrados por Mauricio Guio, y uno de ellos de propiedad de Diego, otros de su madre y hermanos. Solo se advierte la prestación del servicio por el primer declarante desde 2008, mientras que para el segundo, solo en el último año, 2012. No están en condiciones de señalar el despido pregonado por el demandante, pues hablan de la enfermedad del actor y la prestación del servicio hasta que fue hospitalizado y le amputaron una pierna, viéndose imposibilitado para seguir trabajando. No nos muestran la fecha de terminación del vínculo, menos por aproximación, aunque hablan sí, del año 2012. Uno de ellos dice

que el actor fue despedido por Mauricio, pero no lo hace con plena seguridad, sino que conoció de ello por comentarios del propio demandante.

En cuanto al salario, aspecto bastante polémico, los deponentes hablan de sus propias experiencias, sin poder afirmar que efectivamente el actor fuera remunerado con un básico por Diego Guio, y un 10% sobre los fletes pagados por la empresa Logistrans a través del administrador Mauricio. El primero de los testigos mencionó que recibía \$355.000 por fletes por cada viaje, pero esta afirmación no merece para la Sala total credibilidad, porque no habla de la permanencia y continuidad de esas entregas al actor, y no evidencia esos pagos. De manera que con esta prueba no se logra demostrarse plenamente el salario.

No establecidos fehacientemente los puntos anteriores con la testimonial, es menester acudir a la documental para conocer en definitiva el salario, como la fecha de terminación del vínculo. Contamos en primer término con la copia de la resolución nro. GNR 021977 del 4 de marzo de 2013 de Colpensiones, por medio de la cual se concedió pensión de vejez al demandante, a partir del 1º. de marzo de 2013. En la misma se da cuenta de la iniciación de labores, de acuerdo a las cotizaciones con LUIS MAURICIO GUIO PUERTO el 22 de octubre de 2007 hasta el 31 de marzo de 2012. Se determinó un IBL de \$1.178605. (fls. 17 a 22 expediente físico). A partir del folio 23 hasta el 29, apreciamos la serie de incapacidades dadas al trabajador por Saludcoop desde el 23 de julio hasta el 16 de noviembre de 2012. También hallamos las solicitudes del demandante dirigidas a Luis Mariano Guio Puerto tendientes al cobro de las incapacidades anteriores con los recibos de remisión por correo certificado (fls. 45), a la dirección del demandado en el Municipio de Copacabana (Ant.), por los períodos del 23 de julio al 25 de septiembre de 2012 (fls. 43) y del 15 de septiembre al 16 de noviembre de 2012 (Fl. 44).

La administradora de pensiones Colpensiones certificó a folio 208 del expediente físico, el 24 de marzo de 2017 que el señor DELMIRO MONTOYA fue afiliado a ese fondo desde el 31 de diciembre de 1979 y actualmente se encuentra como activo cotizante. Se indica que ingresó por cuenta de GUIO PUERTO LUIS MAURICIO el 11 de octubre de 2007. En la relación de

aportes de la misma administradora de pensiones visible en los folios 226 al 232 vto., se da cuenta de una última cotización en favor del demandante por Luis Mauricio Guio Puerto en el mes de marzo de 2012. Es importante resaltar que los aportes del último año se hicieron por \$536.000 en el 2011 mensuales y 567.000 en el año 2012, que corresponden a los mínimos legales de cada uno de esos años.

La empresa Logitrans en respuesta al oficio nro. 836 del juzgado doce laboral del circuito, remitió el acumulado de los fletes pagados por viajes realizados por los vehículos de placas SKV2901 Y SRL678 de propiedad del señor DIEGO GUIO entre octubre de 2007 y julio de 2012 (fls. 143 a 191), conducidos por MONTOYA RUIZ DELMIRO, no obstante el anuncio anterior, esa relación de pagos se inicia el 23 de junio de 2009, y se le hacen hasta el 19 de julio de 2012.

De esta última certificación se extrae que la relación laboral del señor Diego Guido y Luis Mauricio Guio Puerto se mantuvo mínimamente hasta el 19 de julio de 2012, aunque debemos aceptar que por confesión del demandante en el libelo genitor, se establece que hasta el 12 de julio de ese año prestó servicios como conductor de esa tracto mula, lo que no es indicativo necesariamente que hasta esa fecha llegó el contrato, porque recordemos que existen certificaciones de incapacidades hasta el 16 de noviembre de 2012, llevándonos esa circunstancia a sostener que por lo menos hasta esa fecha estuvo vigente la relación laboral, pues reiteramos no obra en el proceso carta de terminación del contrato, como tampoco la renuncia del trabajador, eso sí las incapacidades no terminan el vínculo, sino que este se mantiene vigente y es por eso que la Sala se inclina por este extremo final que ha sido ampliamente discutido, no existiendo divergencia sobre el inicial, lo que se corrobora con la certificación de Colpensiones de la afiliación del trabajador a esa aseguradora en esa fecha. También queda dilucidado el tema de los empleadores del demandante, pues quedó ampliamente certificado por Logitrans que los carros que conducía el señor Delmiro eran de propiedad de Diego Guido, es decir que a él le servía, lo mismo a Luis Mauricio, quien era el que administraba esos carros y el encargado de afiliar al actor a la seguridad social.

Para el curador de los demandados le crea muchas dudas las certificaciones de las autoridades de tránsito, en las que no aparecen los indicados vinculados como propietarios de esos vehículos, sin embargo este aspecto quedó suficientemente esclarecido con la certificación de Logitrans en la que se da cuenta de que los fletes por el servicio de esos vehículos le pertenecían a Diego Guido, a más de las versiones juradas de los testigos citados, quienes dan cuenta de la propiedad de esos vehículos de la familia Guio Puerto y con la documentación quedó claro de que esos vehículos eran administrados por Luis Mauricio Guio, quien a la vez afilió al actor a la seguridad social.

Se reitera por la Sala que no se encuentra debidamente probado el salario del demandante, pues no contamos con elementos fírricos que nos señalen con seguridad ese salario pactado verbalmente o por escrito, y no podemos sostener que porque a los deponentes se les pagaba de determinada forma, la misma se daba aplicar al trabajador demandante. Las experiencias de los demás no aplican para el caso en estudio. Además, no percibieron los mismos, de manera consistente y repetitiva la entrega de esos porcentajes al actor. No podemos entonces tomar en consideración los fletes pagados al señor Diego Guio y aplicarles el 10% para determinar ese salario. La prueba no es apta, suficiente, idónea y contundente, máxime que no encuentra respaldo en otros elementos, como los pagos a la seguridad social que se hicieron siempre con el mínimo.

Hablan estos testigos de un básico más unas comisiones del 10% del valor de los fletes y aunque se trajo al proceso la prueba de los fletes pagados al señor Montoya Ruiz por la codemandada Logitrans, no sabemos el porcentaje que le correspondía al actor, y si verdaderamente estos dineros eran para el propietario del vehículo o para el conductor. Ante esta falencia, la Sala debe tener en cuenta los salarios mínimos de cada época, como lo pide el curador ad litem de los demandados.

Queda de lo anterior, que no podrá el Tribunal avalar la forma de obtener ese salario como lo hizo el A quo, pues no obra la certeza del porcentaje tomado en cuenta, no quedando otra salida a la Corporación que optar por el mínimo legal, porque recordemos que esa prueba le incumbía a la

parte demandante y al no cumplir fehacientemente con la misma no podemos acoger esa remuneración.

Tampoco se estableció en este proceso como terminó la relación laboral, pues el demandante sostiene que luego de su incapacidad no volvió a trabajar, es más, se desconoce si fue voluntad de los demandados de terminar el vínculo, pues no existe notificación en ese sentido. Hay un silencio en el pago de los parafiscales e incapacidades por los demandados desde el mes de marzo de 2012, pero ello no es suficiente para pregonar la voluntad de estos de cesar la relación. En tal virtud la Sala no podrá acoger la indemnización por el despido injusto solicitada.

Ahora, en cuanto a la prescripción del auxilio de cesantía debemos decir que si bien el art. 99 numeral 3°. de la ley 50 de 1990 introdujo la liquidación anual de este rubro a 31 de diciembre de cada año, y ordenó la consignación en un fondo, no se presenta la extinción de esos pagos por el paso del tiempo mientras esté vigente la relación laboral. Es cierto que hubo una posición jurisprudencial que habló de que como era una liquidación definitiva año a año, bien podía presentarse tal fenómeno extintivo, sin embargo, la misma fue recogida y hoy se sostiene que la exigencia de ese beneficio no puede darse hasta la extinción del vínculo, no siendo procedente aceptar la posición de la apoderada de la firma transportadora codemandada.

Sobre las indemnizaciones moratorias impuestas y reprochadas por la parte accionada debemos sostener que para estas procedan es menester que se presente la mala fe por parte del deudor, la que en sentir de esta Sala aflora plenamente en el comportamiento de los empleadores. Se está condenando a estos al pago de estas indemnizaciones por la no cancelación de las prestaciones sociales, como las cesantías a la terminación del contrato y la consignación en un fondo año por año, por el no pago de las primas de servicio semestralmente, lo que de por sí muestra un desinterés total de la parte en atender sus obligaciones, pero lo más lamentable en este evento es el abandono de su trabajador al encontrarse en una condición de salud precaria. Es claro, como lo dice uno de los testigos que los demandados conocían las condiciones de salud del trabajador al no poder continuar con la conducción del vehículo, al punto

que lo enviaron a recoger el carro que hacía un trayecto entre Tolú y Medellín y a partir de ese instante no le volvieron a pagar, no le cotizaron para la seguridad social, no le pagaron las incapacidades, y en un todo lo dejaron a merced de su suerte, sin importarles para nada su situación. No podemos hablar de buena fe frente a unos patronos indolentes, quienes no dan muestras de humanidad y caridad, sin importarles la condición de su trabajador. Entonces no podemos acoger la tesis de la buena fe, de manera que esas indemnizaciones fueron bien impuestas y se deben confirmar, eso así, se cambiará el monto no solo de las prestaciones y las vacaciones como de dichas indemnizaciones, y la duración de una de estas últimas, pues ya dijimos que se deben liquidar todos esos rubros con el salario mínimo de cada año.

También es importante reseñar que cuando se trata de la solidaridad, como la que se impuso en este caso a la empresa transportadora, la buena fe no puede mirarse en el deudor solidario como lo ha enseñado la jurisprudencia, sino que esta se comunica, así que no podemos detenernos en el análisis de este asunto como se pide por la apoderada de Logitrans, debiendo ser impuesta a esa firma por el solo hecho de la solidaridad sin otra consideración.

Pasamos a determinar lo debido al trabajador por los diferentes rubros. Por auxilio de cesantía \$2.602.814; por intereses doblados de cesantías \$592.060; por primas de servicio \$2.044.936; por vacaciones compensadas en dinero 1.301.407.00; por indemnización del art. 99 de la ley 50 de 1990 \$23.052,868,00; por indemnización del art. 65 del C.S.T \$18.890 diarios desde el 17 de noviembre de 2012 hasta la fecha en que se le cancelen al demandante las prestaciones debidas.

Se confirmará la sentencia de primer grado con las modificaciones en cuanto al extremo final de la relación, como los dineros adeudados por concepto de prestaciones y vacaciones y las indemnizaciones moratorias, manteniéndose la del art. 65 del C.S.T. hasta el pago de las prestaciones sociales.

Sin costas de segunda instancia.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA PARCIALMENTE** la sentencia conocida por apelación, de fecha y procedencia indicadas. La **REFORMA** en cuanto al extremo final de la relación que fue el 16 de noviembre de 2012 y en los valores de las prestaciones y derechos reconocidos, así: Por cesantía se le deben al trabajador Montoya Ruiz \$2.602.814, por intereses doblados de cesantía \$592.060, por primas de servicio \$2.044.936, por vacaciones compensadas en dinero \$1.301.407, por indemnización moratoria del art. 99 de la ley 50 de 1990 \$23.052.868, por indemnización moratoria del art. 65 del C.S.T, \$18.890 diarios desde el 17 de noviembre de 2012 hasta el día en que le paguen las prestaciones debidas.

Sin costas de segunda instancia.

Lo decidido se notifica por estados.

Los Magistrados,



CARLOS JORGE RUIZ BOTERO



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 065 del 20 de abril de 2021.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>